**Democracia, política
y rebelión**

Democracia precaria y rebelión en América Latina

Carlos Figueroa Ibarra*

Se ha dicho que la gran debilidad de las dictaduras militares latinoamericanas fue su incapacidad para hacer efectivas tres grandes mediaciones estatales: la nación, la ciudadanía y lo popular. En este trabajo el autor intenta fundamentar que lo que fueron las deficiencias de las dictaduras, lo siguen siendo de las democracias políticas latinoamericanas instauradas en los últimos veinte años del siglo XX. Sin negar los cambios observados en el desmantelamiento de las dictaduras, estas deficiencias probablemente desvirtúan en lo esencial las nuevas institucionalidades democráticas observadas en la región.

Introducción

En 1975 en una primera ocasión y luego a través de una traducción al inglés publicada por *Latin American Research Review*, Guillermo O'Donnell divulgó su visión acerca de lo que él consideraba las grandes debilidades del *Estado burocrático autoritario*, categoría construida por el autor para designar principalmente las dictaduras latinoamericanas.

De manera muy aguda, Guillermo O'Donnell percibía que detrás de la imponente fachada del *Estado burocrático autoritario* latían tensiones de un proceso de carácter terminal. El autor partía de la

* Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

premisa de que las dictaduras militares en Sudamérica tenían agotamientos intrínsecos que hacían de la bandera de la democracia política un elemento corrosivo de primer orden. La democracia “era la manera adecuada, estratégica y moralmente, de aprovechar las fisuras que una mirada atenta descubría detrás de la fachada imponente del BA (Estado burocrático autoritario)”.¹

En efecto, el gran problema de las dictaduras era que sus grandes fuerzas a la vez eran sus grandes debilidades. Puesto que la violencia siempre es un acontecimiento terrible para los seres humanos, los actos de esta naturaleza que ejecutan estados y organizaciones siempre han necesitado de la legitimación del *bellum justus*. Deslegitimada la noción de dictadura, los regímenes autoritarios de la segunda mitad del siglo XX argumentaron su necesidad con base en una “situación de emergencia”, en una “necesidad temporal”, o bien autocalificándose como “democracias orgánicas”, “responsables” o, contradictoriamente, como “democracias autoritarias” (p. 70).

Pero las tensiones del *Estado burocrático autoritario* no terminaban allí. Puesto que éste no escapaba a la condición general de todo Estado (expresión de relaciones de dominación y, por tanto, expresión institucionalizada de la coerción), necesitaba de las mediaciones a las que todo Estado apela para velar la coerción: los mecanismos del consenso. En una democracia, afirmaba un esperanzado O’Donnell, casi siempre era posible apelar a la nación (que apunta hacia una homogeneización de las diferencias sociales y políticas a través del “nosotros”), a la ciudadanía (que apela a la homogeneización de las mismas diferencias a través de la igualdad jurídica y política, así como a la posibilidad de defensa jurídica frente al poder del Estado) y, finalmente, a lo popular, que convierte a los menos favorecidos en interlocutores del Estado, a través de su demanda de “justicia sustantiva”, de lo cual se derivan obligaciones estatales (p. 72).

Será importante que retengamos estas tres mediaciones que, según O’Donnell, eran posibles en la democracia y poco posibles en las dictaduras. Tan poco posibles que por ello el Estado burocrático autoritario era una “forma subóptima de la dominación burguesa” (p. 88). La ironía en que el desenvolvimiento histórico ha colocado las esperanzas de nuestro autor es que la instauración de la democracia representativa no pudo resolver el fracaso de las dictaduras en lo que se refiere a esas mediaciones.

¹ Guillermo O’Donnell. *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*: Paidós, Buenos Aires/Barcelona/México, 1997, cap. 2, p. 15.

Justo dos años antes de la primera publicación del trabajo de O'Donnell, el capitalismo fordista y keynesiano iniciaba su bancarrota y un nuevo modelo de acumulación empezaba a instaurarse, la *acumulación flexible* como la llamó Harvey.²

En este nuevo modelo de acumulación, que en este trabajo llamaremos neoliberalismo, queda poco espacio para la nación, para la ciudadanía y, sobre todo, para lo popular. El apelativo de *capitalismo salvaje*, difundido en los medios periodísticos, aun cuando probablemente resulte impropio para un ensayo académico, es una buena descripción de lo que ha acontecido y seguirá aconteciendo en el marco de la reestructuración capitalista que el mundo observó en el último tercio del siglo XX.

Precariedad democrática y desigualdad social

En las dos últimas décadas de dicho siglo, como lo auguraba el artículo de O'Donnell, se observó el eclipse de las dictaduras militares. Fue un hecho por demás afortunado para todos los que sobrevivimos a las dictaduras militares en América Latina. La transición democrática hizo surgir en buena parte de la región sistemas de democracia representativa, en los cuales pudieron verse algunas novedades: la disminución sustancial de la cuota de poder de las fuerzas armadas, elecciones no fraudulentas, la desaparición parcial del terrorismo de Estado, las posibilidades de rotación electoral y la gradual sustitución de la cultura del terror por la cultura democrática. Puede hacerse una lectura complaciente de todos estos hechos y concluir que la agenda de la transición democrática está esencialmente finiquitada. Intentaremos sustentar en este trabajo que esta visión es infundada.

A pesar del desmantelamiento de las dictaduras militares propias de la segunda mitad del siglo XX, la nueva institucionalidad democrática que la región observa transcurre con gran precariedad e incluso con hechos que la desvirtúan. Cabe entonces hacer una evaluación de las consecuencias del contexto en el cual transcurren las transiciones democráticas en la región: la dominación estadounidense a lo largo de la misma, la subalternidad de su economía, el autoritarismo impreso en los diferentes estados latinoamericanos, la gran paradoja que presentan estos últimos al combinar una fuerte vocación represiva con una desigual presencia en los distintos ámbitos de

² David Harvey. *La condición de la posmodernidad*: Amorrortu, Buenos Aires, 1998, pp. 164-196.

la sociedad, la incompleta cristalización de lo público en dichos estados, la corrupción que se deriva de lo anterior y el neoliberalismo que profundiza la polarización social y por tanto la pobreza extrema. Todos estos son factores que caminan en sentido contrario a lo que es la democracia en su definición mínima: el conjunto de reglas, valores e instituciones que garantizan la existencia de la ciudadanía. Más aún, son fuente y nuevo contexto de la violencia que hoy vive América Latina.

En el momento climático del Estado benefactor y del keynesianismo, Marshall se atrevió a imaginar la justicia distributiva como algo ligado a la ciudadanía y, a la vez, a esta última como instrumento de lucha contra las desigualdades económicas.³ El neoliberalismo ha invertido diametralmente este sueño: hoy la desigualdad social *desciudadaniza* y la *desciudadanización* reproduce ampliamente la injusticia.

Acaso por ello se redujeron notablemente las expectativas de los que advirtieron que las dictaduras estaban agotadas y que la restauración democrática resolvería las cuestiones de la nación, la ciudadanía y lo popular. La democracia se convirtió en algo que se agotaba en la esfera de la política y tenía sus actores en las diversas elites que comandaban a los distintos sectores de la sociedad. Probablemente el seminal trabajo de Robert Dahl sobre la *poliarquía* y la visión procedimental de la democracia, que desde la segunda posguerra planteó Schumpeter, fueron recursos teóricos útiles para desvincular a la democracia de la cuestión de la desigualdad social. La mayoría de los analistas de la transición democrática se pronunció por la transformación gradual del autoritarismo burocrático en una mera democracia política a través de los pactos elitistas.⁴ Pero la gran limitación de la instauración democrática no

³ Alejandra Ciriza. "Las paradojas de la ciudadanía bajo el capitalismo global. De consensos y violencias", ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Antigua Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre de 2001, pp. 3 y 4.

⁴ Joseph A. Schumpeter. *Capitalism, socialism and democracy*: Harper, Nueva York, 1947. Robert Dahl. *La poliarquía. Participación y oposición*: REI, México, 1993. Algunos ejemplos de trabajos que compartieron la visión elitista y pactada de la transición democrática son Terry Lynn Karl. "Central America at the end of the cold war", en Ward Breslauer (ed.). *Beyond the cold war: conflict and cooperation in the third world*: Regents of the University of California, 1991. Terry Lynn Karl. "Dilemas de la democratización en América Latina", en *Foro Internacional*, vol. XXXI, núm. 3, enero-marzo, 1991. Terry Lynn Karl. "El Salvador's negotiated revolution", en *Foreign Affairs*, núm. 71210, primavera, 1992. Terry Lynn Karl y Philippe C. Schmitter. "Modes of transition in Latin America, Southern and Eastern Europe", en *International Social Science Journal*, núm. 128, 1991. Samuel P. Huntington. *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*: Paidós, Barcelona/Buenos Aires/México, 1994. Philippe C. Schmitter y Terry Lynn Karl. "What democracy is... and is not", en *Journal of Democracy*, vol. 2, núm. 3, verano, 1991. También puede decirse lo mismo de los volúmenes preparados por Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead. *Transiciones desde un gobierno autoritario*.

solamente se debió a las características de su transición —que hizo perdurar los autoritarismos—, sino también al hecho de que dicha instauración se hizo casi paralelamente con la sustitución del modelo desarrollista de acumulación capitalista por el modelo neoliberal.

No han sido precisamente democracias altamente representativas y formalmente institucionalizadas el objetivo logrado en la mayor parte de Latinoamérica. El mismo O'Donnell, antaño tan esperanzado en los logros de la democracia por venir, ha llamado *democracia delegativa* al resultado más común del desmantelamiento de los viejos autoritarismos. Por ésta entiende una “concepción y práctica del poder ejecutivo según el cual por medio del sufragio se le delega el derecho de hacer todo lo que le parezca adecuado para el país”. Se trata de un ejercicio de la soberanía que tiene que ver más con Hobbes que con la democracia liberal: después de la elección del gobernante lo que se espera es que los “votantes/delegadores” vuelvan a ser una audiencia pasiva pero complaciente de lo que hace el presidente. Las instituciones informales (patronazgos, nepotismos, favores y corrupción) coexisten con las instituciones formales y tienen un peso mayor que estas últimas y, como consecuencia: ineficiencia burocrática, legalidad inequitativamente practicada y predominio de lo privado sobre lo público.⁵

Perspectivas comparadas: Paidós, Barcelona/Buenos Aires/México, vols. 1-3, 1994. Y pese a que las protestas de O'Donnell expresadas en Guillermo O'Donnell. *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*: Paidós, Buenos Aires/Barcelona/México, 1997, p. 18, lo mismo puede decirse del volumen cuarto de dicha colección: Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter. *Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas. Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas*, vol. 4: Paidós, Barcelona/Buenos Aires/México, 1994. En el caso específico de O'Donnell, los actores decisivos en la transición son los sectores *blandos* de la dictadura y la “*oposición democrática*” de cuyas negociaciones y acuerdos depende fundamentalmente el resultado del proceso (1997, p. 209). Desde otra perspectiva, los trabajos de Torres Rivas acerca de Centroamérica también tendieron a privilegiar una visión de la transición desde arriba y gradualista: Edelberto Torres Rivas. *La democracia posible*: Educa-Flacso, San José, Costa Rica, 1987. Edelberto Torres Rivas. “Centroamérica: la transición autoritaria hacia la democracia”, en *Crítica Jurídica*, núm. 9, año 5, Universidad Autónoma de Puebla, 1988. Edelberto Torres Rivas. “Centroamérica: democracias de baja intensidad”, en *Estudios Latinoamericanos*, vol. III, año 3, núm. 5, julio-diciembre, 1988b, FCPys/UNAM. Una visión crítica de estos enfoques puede encontrarse en Gerardo Munck. *Social movements and democracy in Latin America. Theoretical debates and comparative perspectives*, estudio presentado en el XVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, 4-6 de abril, 1991, ciudad de Washington. Gerardo Munck. *Identity and ambiguity in democratic struggles*, reproducido por Course Readings for Political Science, “Comparative democratization South, East and West”, impartido por Philippe Schmitter, Universidad de Stanford, invierno, 1994.

⁵ O'Donnell, *op. cit.*, pp. 261-264, 294 y 318. Para O'Donnell las instituciones son pautas regularizadas de interacción conocidas, practicadas y aceptadas por agentes sociales que tienen la expectativa de seguir interactuando conforme a las reglas y normas que rigen esa pautas (pp. 289-290).

Hemos tenido ejemplos paradigmáticos de todo ello en el *menemato* y el *fujimorato* de Argentina y Perú, respectivamente, y en el decepcionante Jean-Bertrand Aristide, hoy convertido en la cabeza de un neautoritarismo en Haití. Más aún, en casos como el del Perú, el “retorno a la democracia” ha significado también la finalización de un proceso contrainsurgente de elevados costos humanos: la guerra desencadenada para desarticular a Sendero Luminoso dejó un saldo aproximado de ocho mil desaparecidos, la mayor parte de los cuales fueron debidos a los gobiernos de Alberto Fujimori.⁶

La visión “politicista” de buena parte de los *transitólogos* olvidó que la democracia política era un buen punto de partida, pero insuficiente para su consolidación y profundización. La democracia política naufraga ante el peso del atavismo de la cultura política autoritaria y ante un modelo económico que, como el neoliberal, incrementa notablemente la miseria de la mayoría de la población y con ello la “desciudadaniza”. Más aún, la reproducción ampliada de las brechas sociales es un excelente caldo de cultivo para la cultura autoritaria, para la reproducción de los clientelismos y para la ausencia del ejercicio de los derechos ciudadanos.

Las antinomias de la democracia: neoliberalismo y globalización imperialista

El Estado burocrático autoritario anuló la democracia política y estableció una política económica cada vez más excluyente y cada vez menos nacionalista, la cual era expresión de la alianza de las fuerzas armadas con lo “menos nacional en la nación”: la gran burguesía.⁷ Merced al cambio en el patrón de acumulación capitalista mencionado páginas atrás, las democracias políticas no cambiaron este hecho que críticamente se señalaba a mediados de los años setenta.

La nación, ese homogeneizante “nosotros” que se expresa a través de la potestad sobre un territorio, esto es, la soberanía que distingue lo externo de lo interno, ha sido seriamente mermada por la globalización, empezando porque ésta ha borrado la

⁶ Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. *Frente al espejo vacío: un acercamiento psicoterapéutico a la violencia política*: Lima, noviembre, 1998. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. *Análisis de la problemática de la tortura en el Perú*: Lima, octubre, 1999.

⁷ O'Donnell, *op. cit.*, p. 84.

tajante separación entre ambos ámbitos. Más aún, porque la globalización que hoy vivimos tiene esencialmente un carácter imperialista. Por imperialismo entendemos la expansión política, militar, ideológica y cultural de un Estado o de un grupo de estados con el propósito de hegemonizar territorios, controlar recursos naturales, expoliar enormes masas humanas y, con todo ello, reproducirse ampliamente.⁸

Parafraseando a O'Donnell, la restauración o instauración de la institucionalidad democrática en América Latina no implicó el desmantelamiento de una política económica cada vez más excluyente y cada vez menos nacionalista expresada en la alianza con lo "menos nacional en la nación": la gran burguesía. La causa principal de esto radica en los efectos que tuvo para la región la gran crisis internacional de 1973 que llevó al eclipse del capitalismo fordista y keynesiano.

Dicha crisis provocó que el inicio del desmantelamiento de las dictaduras militares se viera precedido, en la década de 1970, con la caída de las exportaciones latinoamericanas. Otros rubros, por ejemplo las remesas familiares, son hoy el soporte de las economías latinoamericanas.⁹ La traslación del patrón mundial de acumulación del fordismo y keynesianismo al neoliberalismo, no solamente provocó la crisis del Estado de bienestar en los países centrales; en la Periferia latinoamericana provocó el fin de un modelo que alentó el nacionalismo: la sustitución de importaciones y el desarrollo capitalista asentado en el mercado interno.

⁸ Ilustra la anterior aseveración un dato proporcionado por una investigación dirigida por Pablo González Casanova: la transferencia neta de excedente financiero desde la Periferia al Centro del sistema capitalista se triplicó entre el periodo 1972-1976 y el comprendido entre 1992 y 1995. Carlos Vilas. "¿Globalización o imperialismo?", en *Estudios Latinoamericanos*, núm. 14: Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, julio-diciembre, 2000, pp. 21-23. Por razones de espacio no nos referiremos a un problema esencial para América Latina: la cuestión étnico-nacional.

⁹ En México, Centroamérica y el Caribe las remesas familiares provenientes de los Estados Unidos y Canadá están desplazando a las exportaciones tradicionales. Hoy, la Centroamérica que sustentó su desarrollo económico en la exportación de café, plátano, carne, algodón y azúcar, paulatinamente cede su lugar a la que vive del turismo, la maquila y las remesas de los inmigrados en los Estados Unidos y Canadá. En el caso mexicano, son las remesas familiares el cuarto rubro de ingreso después del petróleo, la inversión extranjera y el turismo. En los cuatro años anteriores a 2001, las remesas provenientes de los Estados Unidos crecieron a un ritmo anual de 11%. Solamente en los primeros nueve meses de 2001, ingresaron 6 500 millones de dólares por este concepto y se esperaba que en los primeros 10 años del siglo XXI tal rubro de ingreso alcanzara más de 100 000 millones de dólares. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Las remesas y el desarrollo rural en las zonas de alta intensidad migratoria de México*: Informe escrito por el consultor Federico Torres en *La Jornada*, México, 2 de febrero, 2002, p. 20.

Otro efecto fue la crisis de la deuda externa en los ochenta (“la década perdida”), que se originó con la aparición de créditos vencidos en el contexto de una disminución de la capacidad exportadora.¹⁰ En América Latina esta crisis profunda se combinó con el auge mundial de las recetas neoliberales —contextualizadas por la globalización— que supuestamente resolverían dicha crisis: desmantelamiento de la versión latinoamericana del Estado benefactor,¹¹ disminución del proteccionismo, apertura de los mercados nacionales, reorganización espacial de la producción, movilidad extraordinaria de capitales, innovación tecnológica que provocó desempleo y abatimiento de los salarios, flexibilización laboral, represión del descontento social y laboral, flujos migratorios extraordinarios, apertura y explotación de los recursos naturales, lucha feroz por recursos naturales estratégicos y, por ello mismo, la necesidad de presencia imperial en territorios también considerados estratégicos.¹²

En la América Latina del siglo XXI, la soberanía de sus naciones se encuentra desvirtuada —además de por las debilidades provocadas por la deuda externa y el neoliberalismo— al menos por tres signos ominosos de carácter imperial: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia.

El ALCA, que tendría que entrar en vigor en 2005, está pensado como uno de los instrumentos esenciales de la dominación estadounidense en la región. Para los Estados Unidos de América se ha convertido en una prioridad estratégica contar con un mercado estable, dado su papel de principal comprador en el mercado internacional, lo que a su vez es una de las explicaciones de su enorme déficit en su balanza cambiaria.¹³ Diversos estudiosos han calificado al ALCA de versión moderna de la Doctrina Mon-

¹⁰ Daniel Libreros Caicedo. “Nuevo modelo de dominación colonial”, en Jairo Estrada Álvarez. *Plan Colombia. Ensayos críticos*: Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001.

¹¹ Este rasgo estaría reservado a aquellos países en los cuales se observó la versión latinoamericana del Estado benefactor: México, Costa Rica, Venezuela, Chile, Argentina y Uruguay. Hablar del desmantelamiento de dicho tipo de Estado en Centroamérica (con la excepción mencionada), sería un abuso del término que rayaría en el ridículo.

¹² Ernesto López. “Las ‘nuevas amenazas’: consideraciones conceptuales”, ponencia presentada en el congreso de la Latin American Studies Association (LASA), ciudad de Washington, 6-8 de septiembre, 2001, p. 3; Libardo Sarmiento Anzola. “Conflicto, intervención y economía política de la guerra”, en Jairo Estrada Álvarez. *Plan Colombia. Ensayos críticos*: Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001, p. 85.

¹³ Libreros, *loc. cit.*, p. 97.

roe¹⁴ y la definición de James Petras es elocuente: “El ALCA es un sistema mercantilista, centrado en la supremacía política de los Estados Unidos, cuyas políticas económicas son dictadas por el Estado imperial a través de un conjunto de estructuras asimétricas, monopolistas, que facilitan el flujo de los beneficios en una sola dirección”.¹⁵ En este contexto, México se convierte en una pieza estratégica para una integración de todo el subcontinente que afiance una hegemonía estadounidense que en el Cono Sur tiene en la inversión europea un rival.¹⁶

A México, en su función de “país bisagra”, le toca cumplir un papel de primer orden en el proceso de conformación del ALCA y en coadyuvar a mantener la estabilidad política en una zona que es neurálgica hoy y otra más que sigue siendo inestable (Guatemala y Centroamérica).¹⁷ También es necesario recordar que toda el área representa el origen de uno de los principales problemas geopolíticos para los Estados Unidos: la migración. Acaso sean estos motivos más importantes, en la inspiración del Plan Puebla-Panamá, que las potencialidades de mercado que el área centroamericana tiene para México: la importancia de ésta como área de comercio exterior para México apenas llega al 1 por ciento.¹⁸

Sin embargo, las razones esenciales del Plan Puebla-Panamá van más allá de las anteriores consideraciones. La gran concentración industrial, comercial, financiera, portuaria y de comunicaciones que se encuentra en la costa este de los Estados Unidos, la más grande del planeta, podría ser una de las explicaciones esenciales de lo que en México se llama el Plan Puebla-Panamá. Al igual que en el siglo XIX, los Estados Unidos siguen necesitando, para enfrentarse al desafío de la globalización y la competencia entre potencias, una vía expedita hacia el Pacífico, y ahora con mayor razón, puesto que Asia se ha convertido en uno de los polos del dinamismo económico

¹⁴ Víctor M. Figueroa. “América Latina: El nuevo patrón de colonialismo industrial”, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Antigua Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre, 2001, pp. 13-14 y 28; Daniel Villafuerte Solís. “La frontera sur de México: cambios y expectativas en el contexto de la globalización”, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Antigua Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre, 2001.

¹⁵ Alfredo Falero. “Migración y sociedad civil regional en el Mercosur: desafíos e implicaciones” ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Antigua Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre, 2001, p.16.

¹⁶ Figueroa, *loc. cit.*

¹⁷ Villafuerte, *op. cit.*, pp. 8, 13-14.

¹⁸ Falero, *loc. cit.*; Villafuerte, *loc. cit.*

mundial. Así pues, el imperio estadounidense necesita corredores viales a lo largo del territorio mexicano que lo comuniquen con el sur y con el océano Pacífico; canales y vías secas de comunicación interoceánica en cada uno de los países centroamericanos y en el istmo de Tehuantepec, que suplan la obsolescencia del Canal de Panamá; infraestructura portuaria en todas las costas que dan hacia el mar Caribe; corredores de maquilas en México, Centroamérica y el Caribe, garantías del dominio de la biodiversidad y, por tanto, de las reservas ecológicas en Mesoamérica, el Caribe y la zona amazónica.¹⁹

Si el Plan Puebla-Panamá se encuentra indisolublemente asociado con el proyecto de integración continental que persigue el ALCA, otro tanto ocurre con la llamada Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia. Particularmente este último sería un proyecto integral de “limpieza de obstáculos” y vencimiento de resistencias, no solamente en Colombia sino en toda la región que la circunda, a efecto de poder implantar el ALCA en 2005.²⁰ De acuerdo con diversos especialistas, el Plan Colombia es una iniciativa imperial que va mucho más allá del país que le da su nombre, puesto que pretende controlar la parte norte de Sudamérica²¹ y en general a buena parte de la región amazónica, la cual, como se sabe, es una de las más ricas del mundo en petróleo y biodiversidad. Por ello mismo, si en el pasado “la amenaza soviética” o la “subversión comunista internacional” fueron los factores que sirvieron de pretexto o de justificación para la intervención imperialista, hoy el narcotráfico y el terrorismo (particularmente después del 11 de septiembre de 2001) serían los enemigos por vencer que justificarían o legitimarían la intervención estadounidense en cualquier parte del mundo.²²

¹⁹ En este tema, el autor simplemente suscribe lo expresado por el economista Andrés Barreda en las extensas conferencias que sobre el Plan Puebla-Panamá ha impartido durante el primer y segundo semestres de 2001, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad de Puebla.

²⁰ Estrada, 2001, p. 37; Caycedo, 2001, p. 202.

²¹ Se trata del “triángulo radical”, como es llamado por Petras y que estaría constituido por la Venezuela gobernada por Hugo Chávez, la Colombia con una poderosa fuerza insurgente y el Ecuador con un palpitante movimiento indígena. El cuadro se completaría con la inestabilidad política en Perú, la creciente movilización social en Bolivia y la emergente protesta social en la Argentina que tendría a final de 2001 su expresión climática. James Petras. “Consideraciones geopolíticas”, en J. Estrada, *op. cit.*, p. 159.

²² Ésta parece ser una coincidencia básica en los ensayos de Estrada, Sarmiento, Libreros, Petras, Caycedo y Vargas Velásquez, incluidos en el volumen compilado por Jairo Estrada Álvarez (*op. cit.*, 2001). Alejo Vargas Velásquez. “Los efectos sobre la guerra y la paz”, en J. Estrada, *op. cit.* Otro ensayo del analista colombiano

Si no hay lugar para la soberanía nacional en las democracias latinoamericanas, tampoco lo hay para lo popular en el sentido de interlocución con el Estado en la demanda de “justicia sustantiva”. A no ser que por tal se entienda a las grandes protestas y rebeliones que tienen sus grandes cúspides en el “caracazo” de 1989, el alzamiento zapatista de 1994 y el “argentinazo” de 2001.

Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mostraban el desolador panorama de la desigualdad humana a fines del siglo XX: las 225 personas más ricas del mundo poseían en 1998 la misma riqueza que 2 500 millones de seres humanos. La riqueza de aquellos 225 magnates equivalía a la del PIB acumulado de los 48 países menos desarrollados del planeta. En América Latina, según datos de la CEPAL, en términos absolutos el número de pobres pasó de 130 millones en 1970 a 203 en 1990 (un aumento de 64%), mientras que la proporción de personas en estado de pobreza alimentaria relativa pasó de 41% en 1980 a 47% en 1990. Según datos del Banco Mundial, entre 1980 y 1989 la proporción de personas en pobreza alimentaria absoluta pasó de 26.5 a 31.5% del total de la población en la región. Los pobres alimentarios relativos aumentaron en 59 millones, mientras que los pobres alimentarios absolutos lo hicieron en 42. Relacionando estos datos con el incremento poblacional ocurrido en el mismo lapso, para obtener la incidencia marginal de la pobreza —proporción de la pobreza en la población que se añadió al total demográfico—, se supo que ésta ascendía a 70.2 y 54% respectivamente. Las estimaciones que se hacían indicaban que, entre 1990 y 2000, el número de pobres en la región crecería de 203 a 232 millones. Ello implicaría que entre 1970 y 2000 los pobres aumentaron en aproximadamente 200 millones.²³

Datos aportados en los documentos de las delegaciones nacionales del Foro de São Paulo indican que en 1997, en México, el déficit total de empleos alcanzaba los

Alejo Vargas Velásquez reitera la misma aseveración. Alejo Vargas Velásquez. “El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina: equivocada respuesta al problema insurgente y poca eficacia en la lucha contra el narcotráfico”, manuscrito inédito, Bogotá, 2001.

²³ Espacio de Reflexión y Acción Conjunta sobre Militarización, Represión e Impunidad en México (Espacio). *El costo humano del proceso de guerra de “exterminio selectivo” en México 1994-1999. Avance exploratorio analítico de las luchas sociales*. Cuaderno de Reflexión y Acción no Violenta, núm. 23: México, verano, 1999. Julio Boltvinik. “Enfoques de lucha contra la pobreza en América Latina. Análisis de los planteamientos del Banco Mundial y de la CEPAL”, en Raquel Sosa Elizaga (coord.), *América Latina y el Caribe: perspectivas de su reconstrucción*: Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas)/Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996.

20 millones de puestos de trabajo. La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) indicaba que un año antes el salario mínimo había alcanzado su nivel más bajo desde 1935. Solamente 35% de los trabajadores ganaban más de dos salarios mínimos (unos 200 dólares), otro 30% ganaba entre uno y dos, 20% recibía menos de uno y 15% no recibía ninguno. Otros datos nos indicaban que, a fines de 2001, los poco más de 163 000 inversionistas (43% de ellos extranjeros) en la Bolsa Mexicana de Valores detentaban inversiones de un billón 190 000 millones de pesos. Esto significaba que el equivalente a 0.16% de la población de México acaparaba un monto de riqueza equiparable a 20% del PIB del país.²⁴

En Brasil las cifras oficiales aceptaban a fin de siglo 80 millones de pobres, 30 millones de los cuales lo eran absolutamente. Los trabajadores informales representaban 50% de los 55 millones que constituían la población económicamente activa. En Uruguay, 11% de la población vivía en el desempleo abierto e, igualmente, 11% vivía bajo la línea de la pobreza, mientras que en el campo tal porcentaje alcanzaba 43%. En Venezuela, el número de pobres absolutos había aumentado 40% desde el inicio de la implantación de las políticas neoliberales. En 1998, 26% de los cinco millones de hogares de dicho país vivían en pobreza extrema y los salarios reales promedio tenían 57% de su valor en 1990. Entre 1998 y 2000 se perdieron en Colombia un millón de empleos y el desempleo abierto llegó a 20.5%, mientras otro 60% estaba constituido por trabajadores informales. Entre 1993 y 1999 el porcentaje de pobres entre la población total del país (42.3 millones) pasó de 51.7 a 56.3, mientras que en el campo pasó de poco más de 70 a casi 80. En Guatemala, según fuentes periodísticas, tres municipios y una etnia en el oriente del país estaban al borde de la extinción por la hambruna, mientras que aproximadamente 103 municipios (una tercera parte del total) estaban en vísperas de llegar a la misma situación.

A principios del siglo XXI, la otrora próspera Argentina tenía una deuda externa de 147 000 millones de dólares (50% del PIB), la cual consumía 22 % del gasto público en pagos de intereses. El 10% más pobre obtenía 1.5% del PIB, mientras que el 10% más rico obtenía 35%. La suma de desempleados y subempleados ascendía a 31%, tenía a 11 (33%) de sus 36 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea de pobreza, 2.5 millones (7%) en calidad de indigentes.²⁵

²⁴ *La Jornada*, 6 de febrero, 2002, p. 22.

²⁵ Los datos consignados en los últimos párrafos han sido obtenidos en Marcia Pereira Leite. "Qual cidadania se estamos em guerra?", ponencia presentada en el XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana-

En síntesis, en cada uno de los países de la región la pobreza arroja datos alarmantes. Más aún —al decir de una analista argentina—, a la categoría de “pobres estructurales” habría que agregar ahora dos nuevas, que reflejarían la debacle de las clases medias: los “nuevos pobres” y los “pobres de nuevo”.²⁶ Como veremos en las páginas siguientes, democracia y desigualdad social constituyen un binomio que difícilmente se combina.

Democracias descuidanizantes, democracias ingobernables

Además de la precaria soberanía nacional ante los embates del imperio y la polarización social que camina en sentido contrario a la ciudadanía, las democracias precarias de América Latina enfrentan otras serias amenazas: los *poderes invisibles* (básicamente el narcotráfico), la violencia urbana que genera apelaciones autoritarias entre los que se sienten amenazados, así como las protestas y rebeliones que reactivan las represiones de carácter político que se creían superadas. Los tres hechos también son factores de crisis de gobernabilidad —cuando no de franca ingobernabilidad— y evidencian los *vacíos estatales* que se observan en la región.

A principios del siglo XXI, el volumen mundial del narcotráfico era calculado entre 400 000 y 700 000 millones de dólares, cálculo que incluía no solamente el intercambio de la droga, sino también el lavado de divisas a éste asociado.²⁷ La región fronteriza entre Afganistán y Pakistán era —hasta antes de los acontecimientos ocurridos después de septiembre de 2001— productora de dos terceras partes del opio y

na de Sociología (Alas), Concepción, Chile, 12-16 de octubre, 1999, p. 6. Guillermina Ramírez. “Exclusión social en Venezuela. Reto y desafío de una promesa de cambio”, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Antigua Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre, 2001, p. 4. Sarmiento, *op. cit.*, p. 66-67; Libreros, *op. cit.*, p. 98; Ciriza, *op. cit.*, p. 5. Beatriz Rajland. “El incumplimiento de los mandatos populares, como ejercicio de violencia de la dominación”, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Antigua Guatemala, 29 de octubre al 2 de noviembre, 2001, p. 12.

²⁶ María Ángela Aguilar. “Pobreza e inseguridad. ¿Dos caras de la misma moneda?, ¿Vulnerabilidad versus inseguridad?”, ponencia presentada en el XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Concepción, Chile, 12-16 de octubre, 1999, p. 5.

²⁷ Jaime Caycedo Turriago. “Una guerra social de la globalización”, en J. Estrada, *op. cit.*, p. 189; Michael Chossudovsky. “Osama Bin Laden: un guerrero de la CIA”, suplemento de *La Jornada: México*, 23 de septiembre, 2001, p. 4.

la heroína consumidas en los Estados Unidos y Europa. La segunda de las áreas del planeta con importancia esencial en el narcotráfico es la constituida por Colombia, Perú y Bolivia. Entre 1994 y 1998, la política antidrogas estadounidense había reducido drásticamente el cultivo de coca en Perú y Bolivia, lo que ocasionó que se desplazara hacia Colombia. Dicho país exportaba 400 toneladas de cocaína anualmente, lo cual significaba un monto de 50 000 millones de dólares. El 95% de este monto se lavaba en el sistema financiero estadounidense y europeo, y entre 2 500 y 3 000 millones de dólares retornaban al país, lo que significaba el triple de las exportaciones de café y un monto superior a las de petróleo. Colombia, al pasar de 20% de la superficie mundial de cultivo de coca en 1990 a 67% en 2000, se había convertido en el mayor productor y exportador de cocaína. El negocio de la droga irradiaba sus efectos por casi toda América Latina, mientras que en los Estados Unidos y Europa las ganancias lavadas se convirtieron en un elemento importante de su economía.²⁸

Independientemente de que se puedan discutir los efectos benéficos en las economías de los países productores y exportadores de enervantes,²⁹ lo cierto es que el surgimiento de grupos poderosos de capital generado ilícitamente crea una situación política y estatal enteramente nueva. La ilegalidad del producto eleva su precio y el poder corruptor de los barones de la droga llega a los más altos niveles del Estado. El caso de Noriega en Panamá, las investigaciones en torno al periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari en México, el encarcelamiento del jefe de la lucha contra las drogas en dicho país —general Jesús Gutiérrez Rebollo— y de siete generales más, así como las evidencias de la participación del narcotráfico en el financiamiento de la campaña electoral del después presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) son algunos de los ejemplos sobresalientes que empuñan a los *poderes invisibles* en otros países.³⁰

²⁸ Caycedo, *op. cit.*, pp. 189-192; Jairo Estrada Álvarez. "Elementos de economía política", en J. Estrada, *op. cit.*, p. 48; Ricardo Rocha García. *Narcotráfico y la economía de Colombia: una mirada a las políticas*: Estudio patrocinado por el BID, mimeo, Colombia, 2001, pp. 4-6. He aquí los motivos por los cuales el analista colombiano Jaime Caycedo Turriago aventura la categoría de *narcocapitalismo*; Caycedo, *op. cit.*, p. 189.

²⁹ Rocha (*op. cit.*, pp. 11-13, 18-19 y 32) pone en duda los efectos benéficos del narcotráfico para Colombia y afirma, en cambio, que implica un enorme costo social y político.

³⁰ José Luis Piñeyro. "Fuerzas Armadas y combate a las drogas en México", manuscrito inédito: México, 2001, p. 6. Arlene B. Tickner. "La 'guerra contra las drogas': las relaciones Colombia-Estados Unidos durante la administración Pastrana", en J. Estrada, *op. cit.*, p. 215.

El narcotráfico se ha convertido en una alternativa de sobrevivencia para enormes conjuntos poblacionales en las áreas rurales y urbanas,³¹ ha corrompido notablemente, y acaso de manera irremediable, a los cuerpos policiacos y militares, así como a partes significativas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; ha influido de manera subrepticia pero notable en no pocos partidos políticos y en sus dirigentes;³² sus intermediarios han construido poderes alternos al Estado en campos y ciudades; ha estimulado el surgimiento de otras ramas del crimen organizado (contrabando de armas, de indocumentados, grupos paramilitares, bandas de sicarios y secuestradores) y ha elevado notablemente los índices de violencia y criminalidad en las ciudades, especialmente en sus áreas pobres y marginales.³³

En síntesis, la existencia en América Latina de grupos poderosos de capitalistas criminales que operan detrás de bambalinas, en mayor o menor medida, según el caso, ha puesto en crisis la soberanía del Estado, ha profundizado la existencia formal del Estado de derecho, ha deteriorado el supuesto ejercicio legítimo y monopólico de la violencia (acorde con la famosa fórmula de Max Weber), ha ocasionado la pérdida de la independencia de los poderes del Estado, ha desprestigiado aún más la política y el poder político, y ha incrementado las regiones en las cuales el *vacío estatal* es una realidad.

Además de escenario de pobreza y desigualdad social, América Latina también se convirtió, en los años ochenta y noventa, en la segunda región con más violencia delincuenciales en el mundo: en 1994, su tasa de homicidios alcanzó 28.4 por cada 100 000 habitantes, después del África subsahariana, que en 1990 tenía una tasa arriba de 40 por cada 100 000 habitantes. Las tasas de homicidio por cada 100 000 habitantes subieron en los años ochenta de manera espectacular en Perú y Colombia

³¹ En México genera 355 000 empleos, según el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, mientras que, según la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, se convierte en fuente de ingreso en 80% de los municipios más depauperados (Piñeyro, 2001, pp. 3, 11). En Colombia es fuente de 40 000 empleos directos (Rocha, 2001, p. 11). En Bolivia, la presencia relevante del movimiento de campesinos cocaleros habla por sí sola.

³² El caso colombiano es el más explícito: Pablo Escobar Gaviria formó su propio partido, llegó a ser diputado e inclusive fue evidente la influencia del narcotráfico sobre una parte del poder legislativo.

³³ En Colombia, dos investigadores, Fabio Sánchez y Jairo Núñez, encontraron que en las siete mayores ciudades y sus áreas metropolitanas un incremento de 1% de los ingresos por narcotráfico elevaba la tasa de homicidios en 0.2% (Rocha, 2001, p. 17). El caso de Medellín es paradigmático: la causa primera de la mortalidad masculina es la violencia (Fernández Moreno, 2001).

en 379 y 337%, respectivamente, lo que puede explicarse por las guerras internas que padecieron. En términos absolutos, a fines de los ochenta y principios de los noventa, Colombia tenía una tasa de 89.5% (más del doble que la región más violenta del mundo), seguida de lejos por Brasil (19.7), Perú (11.5) y Ecuador (10.3). Lo importante es que a principios de los años noventa del siglo XX, en Brasil y Uruguay la tasa de homicidio había subido en alrededor de 70%, en Ecuador 60%, en Argentina y Venezuela entre 23 y 30%.³⁴ En Guatemala, según datos del PNUD, en solamente un lapso bianual, la violencia delincriminal aumentó en la capital del país 14%.³⁵ El sociólogo venezolano Roberto Briceño-León ha dicho que la “violencia tiene una mayor relación con el proceso de empobrecimiento que con la pobreza”. Sus afirmaciones en relación con el caso venezolano pueden extenderse a otros países: la disminución de la acción del Estado para paliar la miseria y la profundización de la pobreza en las décadas de los ochenta y los noventa han dejado sin esperanzas a los pobres de la región. El control social se ha relajado no sólo porque el Estado se ha ausentado (por su ausencia o por carecer de legitimidad), sino también porque la familia y la escuela se han visto desmanteladas en las áreas de pobreza.³⁶ La mayoría de los estados latinoamericanos parecen combinar sus ausencias en la gestión de la seguridad y la justicia social con sus presencias punitivas a través de policías corruptas y asociadas con el crimen organizado. En el lado de la sociedad civil, la creciente marginalidad adopta una forma perversa de rebelión, de tal manera que no resulta extraño que la violencia urbana sea calificada ya como “el devenir siniestro y policiaco de la lucha de clases”.³⁷

Todo lo dicho hasta aquí parece ser una explicación más consistente que la que en un momento dio William Bratton, ex jefe de la policía de Nueva York y arquitecto de la noción de *tolerancia cero* frente a la delincuencia: “la causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de las condiciones sociales”.

³⁴ Lucía Dammert. “Violencia criminal en la Argentina de los 90’s: diagnósticos y desafíos”, ponencia presentada en el congreso de la Latin American Studies Association (LASA), ciudad de Washington, 6-8 de septiembre, 2001, pp. 3-4.

³⁵ Danilo A. Palma Ramos. *La violencia delincriminal en Guatemala: un enfoque coyuntural*: Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Guatemala, C.A., s/f.

³⁶ Roberto Briceño-León. “Buscando explicaciones a la violencia”, en *Espacio Abierto*, vol. 6, núm. 1: Caracas, 1997.

³⁷ Ciriza, *op. cit.*, p. 1.

Desde una perspectiva conservadora o neoliberal, la delincuencia es un fenómeno que tiene su explicación en el individuo que viola el contrato social.³⁸ La explicación reaccionaria tiene su consecuencia inevitable en apelar a la represión como única forma de contener el crimen.

Lo anterior se expresa, como sucede en muchas ciudades latinoamericanas, en la añoranza autoritaria de las clases medias y altas que hoy observamos en Latinoamérica. Se culpa del incremento del crimen a la instauración de la limitada institucionalidad democrática que hoy observamos en la región. El descontento aumenta cuando se observa la corrupción del sistema judicial y policiaco.³⁹ Los medios de comunicación, principalmente la televisión, magnifican el fenómeno de la delincuencia y contribuyen a promover en amplios sectores de la población, especialmente en las clases medias,⁴⁰ la apelación autoritaria y el reduccionismo punitivo como soluciones al crimen organizado y a la delincuencia común. Fomentan el descontento ante los derechos de los reclusos y la idea de que un delincuente no debe tener derechos ciudadanos.⁴¹ Tal es el proceso de construcción ideológica que legitima la política neoliberal que reduce gastos sociales, al tiempo que incrementa costos en el aparato represivo.⁴²

El neoliberalismo ha profundizado las deficiencias seculares de los estados latinoamericanos y, por tanto, ha hecho más notorias las ausencias estatales al debilitar al Estado en ámbitos en los que el mayor gasto social del modelo desarrollista lo hacía tener presencia. En estos espacios es donde brotan las distintas manifestaciones de la rebelión, o al menos una suerte de “aestatalidad”, en la América Latina del siglo XXI. Desde los albores del neoliberalismo, los rigores de éste provocaron todo tipo de

³⁸ Lucía Cid Lopes Ferreira. “Controversias del control social: entre el constreñimiento y la cooperación”, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Antigua Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre, 2001, p. 9.

³⁹ Mary Fran T. Malone. “Crime and democratic consolidation: the impact of public trust in the criminal justice system”, ponencia presentada en el congreso de la Latin American Studies Association (LASA), ciudad de Washington, 6-8 de septiembre, 2001.

⁴⁰ Una encuesta Gallup realizada en Buenos Aires reveló que los sectores más golpeados por el delito fueron la clase media y la clase media alta (61%) (Aguilar, *op. cit.*, p. 11).

⁴¹ Pereira, *op. cit.*

⁴² En su campaña electoral de 1999, el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México llegó a difundir un anuncio televisivo en el que decía que “las *ratas* [rateros] no tienen derechos humanos”. Una investigadora resalta cómo la sociedad argentina se indigna ante el hecho de que se cometa un robo cada 45 minutos y cuatro asesinatos por día, pero no parece mostrar similar conmoción por el hecho de que la miseria mate a 47 niños menores de cinco años cada 24 horas (Aguilar, *op. cit.*, p. 8).

actos de resistencia. Dos autores, Walton y Shefner, constataron que entre 1976 y 1989 se observaron 80 campañas de protesta contra la austeridad. En el periodo comprendido entre 1996 y 2001, los diarios latinoamericanos y estadounidenses dieron cuenta de 281 campañas y 969 protestas en la región.⁴³ Las proporciones de tales campañas tuvieron un comportamiento oscilatorio con cúspides que significativamente son cada vez más grandes que las anteriores: en 1997, 1999 y en 2000. De igual manera, el epicentro de las protestas pasó de Perú, Argentina, República Dominicana, Brasil, Bolivia y Venezuela, en los ochenta y principios de los noventa, a Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre 1996 y 2001.⁴⁴

Ciertamente, nuevos actores y nuevas expresiones de lucha han surgido en todo este proceso. El desmantelamiento de industrias y la caída de productos de primoexportación han hecho desaparecer a antiguos sujetos. El mercado del narcotráfico ha dado lugar al surgimiento de otros. En Bolivia, los legendarios mineros del estaño casi han desaparecido y en su lugar han surgido 35 000 familias y 200 000 personas —muchos de ellos antiguos mineros— que viven de la producción y comercialización de la coca.⁴⁵ Los *cocaleros* han sido, en los noventa, uno de los ejes del movimiento popular boliviano. Los *cocaleros* del Putumayo, Guaviare y Baja Bota, en Cauca, Colombia, han encabezado un fuerte movimiento para que los reconozcan como movimiento social y no como simples delincuentes.⁴⁶ Surgido de tradiciones de lucha campesina desde los años setenta del siglo XX, nutrido con ex obreros industriales que perdieron su trabajo, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) se convirtió en los noventa en la parcela más conocida e influyente del movimiento social brasileño.⁴⁷ En Ecuador, las distintas etnias agrupadas en el Consejo Nacional Indí-

⁴³ El autor del trabajo que consigna estos datos define a las campañas como luchas extensas contra una política específica de austeridad y a la protesta como los sucesos individuales que se observan en una campaña (marchas, cortes de ruta, huelgas, etcétera).

⁴⁴ Paul Almeida. “Los movimientos populares contra la austeridad económica: América Latina 1996-2001”, ponencia presentada en el congreso de la Latin American Studies Association (LASA), Washington, 6-8 de septiembre, 2001, pp. 1, 5-6.

⁴⁵ Eusebio Gironde C. *Coca inmortal*: Plural, La Paz, 2001, p. 394.

⁴⁶ María Clemencia Ramírez. “Construction and contestation of criminal identities: the case of the *cocaleros* in the Putumayo and Baja Bota of Cauca”, ponencia presentada en el congreso de la Latin American Studies Association (LASA), ciudad de Washington, 6-8 de septiembre, 2001.

⁴⁷ María Antonia de Souza. “MST: después de la conquista de la tierra, la lucha contra la exclusión social”, ponencia presentada en el XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Concepción, Chile, 12-16 de octubre, 1999.

gena (Conai) se convirtieron, en los últimos años del siglo XX, en el epicentro de una poderosa fuerza social que tuvo que ser tomada en cuenta para restablecerse la gobernabilidad. A partir del segundo lustro de los ochenta, el movimiento étnico resultó ser la gran novedad en Guatemala, como también sucedió con los mapuches en Chile. En Argentina, los motines de Santiago del Estero y La Banda parecen ser el inicio de una creciente protesta popular manifiesta en revueltas, motines, manifestaciones callejeras, cortes de ruta y huelgas que tuvieron un momento climático a final de 2001. Burócratas, estudiantes y jubilados aparecieron como nuevos sujetos colectivos a la par de los ya conocidos sindicatos de distinta filiación.⁴⁸

Ex obreros y ex mineros convertidos en luchadores agrarios, trabajadores rurales con demandas campesinas, burócratas, estudiantes, pueblos indígenas, desempleados, ambientalistas, mujeres: tales son algunos sujetos del abigarrado movimiento de protesta social en América Latina. Las formas de expresión de la protesta incluyen también novedades, además de los ya antiguos “cacerolazos”: marchas a caballo y con machetes que evocan el imaginario zapatista y villista, tambores y cornetas propias de las porras deportivas, crucifixiones, desnudamientos en público, perforaciones de piel y extracciones de sangre. En medio de toda esta diferenciación, drama y manifestaciones lúdicas, los obreros parecen seguir desempeñando un papel significativo. Entre las 281 campañas de protesta en contra de la austeridad registradas entre 1996 y 2001, el sujeto más activo fue la clase obrera, con una participación en 56% de dichas campañas.⁴⁹

El Estado latinoamericano se vuelve una eficiente maquinaria represiva especialmente cuando se enfrenta a oposiciones y subversiones. Los mismos estados que fueron implacablemente eficientes en la represión en Guatemala, El Salvador, Argentina, Uruguay y Brasil, se comportan hoy de manera inversa con el crimen organizado y la delincuencia común.⁵⁰ En Colombia, en el año 2000 se asesinó a un dirigente

⁴⁸ Nicolás Íñigo Carrera y María Celia Cotarelo. “Formas de la protesta social en la Argentina de los 90”, ponencia presentada en el XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Concepción, Chile, 12-16 de octubre, 1999.

⁴⁹ Almeida, *op. cit.*

⁵⁰ Es necesario resaltar el caso de Guatemala, donde en medio del crecimiento rampante del crimen organizado y la delincuencia común, el aparato de la guerra sucia no ha sido desmantelado. Más aún, los oficiales más connotados de la inteligencia contrainsurgente tienen una red de lealtades recíprocas que es conocida como “La Cofradía”. La Cofradía (típica manifestación del *poder invisible*) era, a principios del siglo XXI, uno de los grupos de poder invisible más influyentes en el país. Véase Manolo Vela. “Guatemala: democratiza-

sindical cada tres días, se registraron 10 asesinatos políticos y una desaparición forzada diariamente, así como una masacre (más de cinco víctimas en un hecho) cada dos días. Ese mismo Estado permitía 3 000 secuestros y 30 000 homicidios al año, de los cuales solamente 12% eran por motivos políticos, y la impunidad respecto a la delincuencia se calculaba en 90%.⁵¹ En México, 90% de un total de 520 acciones militares y de control —observadas entre 1998 y 1999— se concentraron en el sur del país, y solamente en Chiapas se calculaba que el ejército mantenía contra el zapatismo entre 50 000 y 60 000 efectivos (30% del total). En ese mismo periodo, de un total de 319 acciones armadas registradas, 42% las realizaron los grupos paramilitares, o bien, civiles armados, mientras que 313 activistas sociales fueron asesinados.⁵²

Conclusiones

Las teorías políticas modernas imaginan el sistema político democrático como la articulación del liberalismo con la legitimidad que emerge del *demos*. Ello implica que la figura del ciudadano, encarnación de la igualdad jurídica y política frente al Estado, se cobija en el conjunto de valores, reglas e instituciones que constituyen la democracia. Imaginan un Estado que garantiza el pluralismo, y ese pluralismo es tan celosamente planteado que sus teóricos más radicales lo asumen como encarnación de la neutralidad valorativa. Monopolio de la violencia legítima, soberanía en lo interno y externo, división y equilibrio de poderes, rotación electoral, elecciones limpias y libres, libertades civiles, rendimiento de cuentas, eficacia administrativa y Estado de derecho son algunos de los atributos de un sistema político que hoy ha emergido como la forma de gobierno deseable por excelencia.

El fin de las dictaduras militares y de los autoritarismos de partido (el caso de México) no ha hecho emerger el sistema político sucintamente retratado en el párrafo anterior. Puede argumentarse con justeza que no lo ha hecho en ninguna parte del mundo. Finalmente, autoritarismos velados, nepotismos, corrupciones, compadrazgos, clientelismos, impunidades, violencia represiva y poderes invisibles existen hasta en

ción y servicios de inteligencia”, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), Antigua Guatemala, 29 de octubre-2 de noviembre, 2001.

⁵¹ Sarmiento, *op. cit.*, p. 75.

⁵² *Espacio*, 1999, pp. 99-111.

las democracias más consolidadas. La cuestión es si las deficiencias y ferocidades que se observan en América Latina no desvirtúan la esencia de la democracia política.

Si nos atenemos a una visión procedimental de la democracia, acaso los hechos argumentados en las páginas anteriores no sean razón suficiente para descalificar la nueva realidad política que se observa en la región. Hoy, en América Latina los gobernantes electos son los que ejercen las cuotas esenciales del poder, las elecciones en términos generales son ajenas a fraudes, existe rotación de partidos en el gobierno, los índices de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas provocadas por los aparatos represivos son notablemente más bajas que antaño y parece impensable el retorno de las fuerzas armadas como ejes vertebrales de un autoritario poder político.

Sin embargo, en América Latina hemos visto autoritarismos rampantes vinculados a la corrupción encarnados en figuras como Salinas de Gortari, Menem, Fujimori y Aristide; poderes invisibles ejercidos por narcotraficantes o aparatos de guerra sucia que van mucho más allá de las mafias observadas en los países centrales; gobernantes con poco espacio para ejercer la soberanía del Estado; ausencias estatales (porque no hay Estado o porque, si lo hay, no tiene legitimidad) que explican los linchamientos en diversos países de la región; crimen organizado que ejerce poderes informales al administrar con legitimidad, justicia cruel y expedita en *barrios, favelas, poblaciones y limonadas*, violencia delincuencia que no es controlada y produce crisis de confianza en el sistema policiaco y judicial; rebeliones y protestas populares que transforman la precaria gobernabilidad democrática en ingobernabilidad y terror estatal; grupos paramilitares que actúan al margen o en complicidad con el Estado; guerrillas que se legitiman en su actuar en la rampante desigualdad social.

La evaluación refleja los límites de las cuentas alegres que durante un buen tiempo hicieron la mayoría de quienes analizaron las transiciones políticas en América Latina y algunos otros países. Buena ha sido la sustitución de la institucionalidad autoritaria por la inspirada en la democracia representativa. Es mucho mejor vivir en el seno de una gobernabilidad democrática apegada al Estado de derecho, que en su contrario. Malo ha sido pensar que todo este proceso es suficiente.

Ridículo afirmar que con ello termina la historia.